



REUNIÓN CON DELEGADOS DE UATRE EN VILLA MARIA CONCLUSIONES

Con la presencia de Cooperativas, Acopiadores, representantes del Agro y de nuestra Institución

Se trató de una postergada reunión organizada con los dos delegados principales de Córdoba, el Sr. Horacio Lorandi y el Sr. Clemente Iriarte, y nuestra Institución, por temas puntuales –también pospuestos– relacionados con tres focos de conflictos reclamados por varios acopios y cooperativas de la provincia, a saber:

a) Errores de interpretación y de su ajuste tarifario de algunos “movimientos”, como oferta de trabajo, reflejados en la última Resolución N° 37, de aplicación para toda la Provincia de Córdoba (o sea de orden provincial dictado por la CNTA nacional), sobre los que se pretende revertirlos y ajustarlos a criterios que resulten de clara aplicación. A ambos dirigentes gremiales se les solicitó la presencia del delegado nacional, Sr. Juan C. Castro, con el objetivo de que dicho funcionario nacional de UATRE fuese el indicado para elevarlo a la CNTA de manera rápida y se concluyera con estas asimetrías.

b) Aclarar la aplicación de las “horas extras” en el contexto diario laboral (después de las 8 horas comunes), y la aplicación de recargos para sábados por la tarde, domingos y feriados, incluso la aplicación de la denominada “víspera”.

c) Tratar las Tablas salariales “locales” que dentro de la provincia se están aplicando (compulsivamente) con valores de sus movimientos por encima de la Resolución N° 37/05 de la CNTA, “acuerdos” éstos que no cuentan a la fecha con la aceptación y la firma de los acopiadores socios pero que son impuestos desde antes de que naciera la Resolución o Tabla salarial General para toda la provincia. El criterio es emparejar a toda la provincia con los mismos valores (que no son impuestos por nosotros pero si concensuados en sus ajustes) de la Tabla oficial, desapareciendo entonces estas asimetrías que generan competencia desleal de una localidad a la otra. Los caminos posibles de seguir son: o se eliminan los mayores importes y se aplican los de la tabla, que es de aplicación obligatoria en toda la provincia; o para digerir esta situación por parte del gremio ofrecer continuar pagándolos pero separando los conceptos: uno es el pago del movimiento a destajo o por hora –Tabla oficial– y el excedente se denomina “a cuenta de futuros aumentos”. Como una de las localidades más conflictiva sobre este tema ha sido y es comandada por el representante hoy nacional de UATRE, Juan C. Castro, también era conveniente para tratar esa cuestión su presencia a fin de concluir el razonamiento.

No se les comenta su opinión. Imagíenla.

d) Por último, concientes todos los sectores dadores de trabajo presentes de que debíamos consensuar un ajuste de la tabla salarial actual en concepto de “emergencia” separando estos aumentos de los valores oficiales a la fecha y hasta la reunión del mes de julio/agosto en la Comisión Regional Asesora N° 5, con sede en Córdoba, fuimos a la reunión con la mayor predisposición. Sin embargo, este tema no se pudo tratar.

En medio del tratamiento de los primeros puntos, comandados por el “muy enojado” Sr. Juan C. Castro, todos los representantes de UATRE se retiraron de la reunión, la que por cierto quedó inconclusa.

Intercambiando opiniones el resto de los presentes, todos dadores de trabajo, concluimos en preparar un formal reclamo para elevarlo ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, específicamente a la CNTA, exponiendo nuestras preocupaciones y con el

fin de que se instruya a las delegaciones de la provincia de Córdoba para que procedan ajustadas a derecho.

GERENCIA

Opinión del Departamento Jurídico de la Socacopcba:

1) El sector acopiador de la Republica Argentina, junto a las cooperativas, es el mayor dador de trabajo de la mano de obra encuadrada en el régimen no permanente de trabajadores agrarios (Ley 22.248, Título II). Paradójicamente, no participa de las negociaciones paritarias directas sobre las remuneraciones de este personal, ya que ni la Ley 22.248 ni los decretos reglamentarios incluyó a este sector en la Comisión Nacional de Trabajo Agrario. Solo participa la Sociedad de Acopiadores de Granos de Córdoba en las reuniones que se llevan a cabo en la Comisión Asesora Regional N° 5 con sede en Córdoba: tiene voz pero no puede firmar las recomendaciones que se elevan a la CNTA, quién emite luego la resolución con los acuerdos (y disidencias) a aplicar en la provincia. En innumerables oportunidades se ha intentado, sin éxitos, ingresar a la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, lo que configura una clara situación de discriminación para el sector acopiador, ya que se le imponen tarifas salariales que no se pudieron discutir ni consensuar. Los argumentos son que las cooperativas (CONINAGRO) o las agrupaciones de productores (SRA, FAA o CRA) son representativas de todo el sector empleador, lo cual no es así, ya que las primeras por su organización institucional, y los segundos por su actividad generadora de productos primarios, lejos están de representar la estructura empresaria propia de un acopiador.

2) UATRE representa a todos los trabajadores agrarios del país, pero en las localidades donde existen las denominadas "bolsas de trabajo" (en realidad son una sede física del sindicato), la representación frente a los acopiadores se convierte en una herramienta de presión constante, buscando permanentemente mejorar condiciones y precios a favor del gremio, llegando a los extremos de retirar su fuerza de trabajo o realizar toma de establecimientos en casos en que las posiciones de los empresarios no los conformen.

3) En las últimas resoluciones, especialmente en la n° 37 del año 2005 de la CNTA se observan enormes carencias de técnica legislativa. Las normas son poco claras, algunas contradictorias entre si. En una resolución en la que se deben incluir movimientos laborables, los mismos deben ser lo más descriptivos y específicos posibles, que permita diferenciar con claridad las tareas que pretende abarcar y regular. En la norma en cuestión aparecen movimientos similares con tarifas distintas. Eso lleva a que, según se la interprete, una misma tarea pueda tener precios bien diferentes, lo que ha provocado importantes conflictos por las interpretaciones dispares que la misma norma permite, incluída la pretensión de cobrar sobre trabajos no realizados.

4) Derechos adquiridos: algunas condiciones y tarifas obtenidas en algunas localidades que superan lo establecido como tarifas únicas para toda la provincia por la resolución 37/05 son defendidas por el sector trabajador con el pretexto de que se trata de derechos adquiridos por los usos y costumbres. En contraposición nuestra postura entiende que los derechos adquiridos valen únicamente para cada contrato. En estos casos en que los contratos con los trabajadores se extinguen día por día o cuando concluyen con las labores para los que se los contrató, cada nueva contratación es una oportunidad para plantear nuevas condiciones de trabajo: sólo por ese lapso de contratación la mayor tarifa concertada de ese movimiento es derecho adquirido. Termina cuando se extingue esa contratación. O sea, no es para siempre porque no se trata de un mensualizado de la ley 20.744.

5) El punto anterior sirve para sostener que si bien en algunas localidades, algunas empresas pagan tarifas por encima de la Res. 37, el acopiador cumpliría abonando lo que señala la mencionada norma, conceptualizando las diferencias en más que se abonan como "a cuenta de futuros aumentos".

6) Jornada de trabajo: En algunas localidades, por imperio de estos "derechos adquiridos", se abonan como horas extras los trabajos que se prestan luego de determinados horarios (por ejemplo: recargo del 50 % cuando trabajan mas allá de las 18 hs). Debemos señalar que para que haya horas extraordinarias primero debe haber horas ordinarias. La Resolución 17/02 de la CNTA establece que la jornada de labores para los trabajadores comprendidos en el Régimen Nacional de Trabajo Agrario no podrá exceder de 8 horas diarias, siendo facultad del empleador la distribución de las

horas de trabajo diarias. Aclaramos que la resolución no distingue entre trabajadores permanentes y no permanentes. Por lo tanto si un trabajador es ocupado por ejemplo, a las 18 hs y hasta las 20 hs. estas serian las primeras dos horas ordinarias de la jornada y no horas extras como algunos filiales sindicales locales pretenden cobrarlas.

DEPARTAMENTO JURÍDICO SOCACOPCBA.

PUBLICACIONES PERIODÍSTICAS

La reunión en Villa María tuvo cobertura periodística.

Hubo luego dos publicaciones. Una en el periódico Semana Rural y otra en El Diario de Villa María.

Transcribimos ambas a continuación.

SEMANA RURAL

Producto de diferentes interpretaciones de la legislación oficial y visiones muy divergentes respecto a los márgenes del negocio del acopio están abriendo las puertas a un conflicto de dimensión desconocida cuando arranque la cosecha de granos gruesos, alertó la Sociedad de Acopiadores de Granos de la Provincia de Córdoba. También entidades representativas de los productores tienen una preocupación similar. Esos temores se acrecentaron después de una reunión que tuvo lugar en Villa María acordada con la expectativa de consensuar un entendimiento en materia salarial entre representantes de acopiadores, cooperativas, CARTEZ y el gremio de los trabajadores rurales, UATRE.

Sin embargo, la deliberación concluyó sin encontrarse un punto de conciliación, dejando latente un problema que puede desencadenar trastornos en la época de cosecha.

Conflicto en puerta

Juan Carlos Giraudo, director ejecutivo de la Sociedad de Acopiadores de la provincia de Córdoba contextualizó el problema: "Viene la cosecha gruesa, y desde marzo-abril, y hasta agosto la provincia va a estar levantando, procesando cereal y comercializando. La Ley 22248 regula la presencia de personal no permanente pero hay gente que hace muchos años que trabaja en esta tarea. Los tiempos actuales son diferentes: hay una presencia importante de impuestos distorsivos, operaciones no formales, operaciones directas, entre otras cosas. Hay una disputa entre molinos-fábrica y exportadores, y la puja es quién puede tratar más cereal. Ellos simplifican y bajan costos al productor, mientras que nosotros debemos honrar diferentes convenios, entre los que se encuentra comercio, camioneros y trabajadores rurales. Los valores que perciben los trabajadores se reglan por un movimiento tarifario y el gremio plantea un aumento".

Con este punto apareció el primer foco de conflicto ya que surgió una diferencia importante entre lo establecido "y lo que terminó siendo publicado oficialmente", dijo Giraudo. Agregó que "nosotros buscamos aclararlo porque lo asignábamos a un problema de impresión, pero nos encontramos con una pretensión desmedida por parte de Uatre".

Años atrás las relaciones acopio-trabajadores era reglada por la provincia, que se manejaba con convenios zonales. Posteriormente el Estado nacional decidió hacer una tarifa para todo el país, y quedaron algunos acopios que pagaban por encima de esos valores normados en la resolución 37, que fue producto del trabajo en la Comisión Nacional de Trabajo Agrario. "Vinimos a decir que a aquellos trabajadores que están cobrando por encima de eso, no se le va a sacar nada, pero lo consideraremos a cuenta de futuros aumentos. Así, en el futuro, todos podremos tener una sola tarifa y se evitará la competencia desleal".

Otro tema es que dentro de la tarifa hay varios movimientos que "habíamos consensuado, a través de lo que llamamos el 10 más el 10 por ciento en dos años", expresó Giraudo. Pero hubo ítems que a juicio de los acopiadores "se han colocado en valores que no se pueden sostener, porque no hay quien pague por ello. Le dijimos que no podemos cumplirlo y por ello se enojaron", aseveró. "Estaban incluídas en la Resolución 37 pero básicamente no se condicen con la realidad".

"Y la tercera cuestión es que el acopio de granos, para competir adecuadamente en agilidad, en el incremento de la cosecha y en los volúmenes, está obligado a incorporar

tecnología. Esto ha restado trabajo al personal. En las resoluciones hay obligaciones absurdas, como lo es pagar por trabajos que no se hacen”.

“En definitiva, se ha puesto una tarifa muy alta y nosotros no las aceptamos, pero el gremio tiene representación nacional en la Comisión Nacional de Trabajo Agrario y junto al Gobierno imponen su mayoría, no obstante la oposición de todas las organizaciones del campo, que son las que nos representan en esa instancia”

Posición de CARTEZ

Ricardo Osella, presidente de Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez) estuvo presente en la reunión de Villa María: “Nosotros, como representantes de los productores creemos que no debe haber una retribución ilógica. Creemos que el trabajador debe ganar bien y estar registrado, pero la desmesura puede conducir al reemplazo por máquinas y con ello la pérdida de puestos de trabajo”. El dirigente rural se refirió a tareas que se siguen pagando sin cumplirse, por imposición de nuevas realidades tecnológicas: : “Para nosotros no es justo pagar por la tarea de ver caer los granos, esto es, verificar el cumplimiento de la Ley de Gravedad, aunque sea poco”. Aparte, la Resolución 37 contiene otros puntos igualmente discutibles.

“Nosotros estamos seguros de una cosa: todo sale de un mismo lugar, que es el bolsillo y el esfuerzo del productor. Y eso llega un momento que se acaba”.

Posición de la UATRE

La UATRE, a través de Juan Carlos Castro, pro-secretario de finanzas del gremio, sostiene que pretenden “encontrar a los trabajadores en la resolución 37 de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, y acordar un ajuste de salarios, visto que la inflación ha producido un deterioro”, incluyendo en eso a tareas tales como paleo de silo con aireación, Silo de emergencia, Silo celda y celdas australianas.



Problemas de interpretación y... algo más

Producto de diferentes interpretaciones de la legislación oficial, y visiones muy divergentes respecto a los márgenes del negocio del acopio, tras una jornada de trabajo escenificada en Villa María, que reunió a representantes de los acopiadores, productores y trabajadores rurales, quedaron abiertas las puertas a un conflicto, cuando arranque (en serio) la campaña gruesa.

“Ingresamos en una etapa de conflicto”, dicen los acopiadores

Juan Carlos Giraudo hace “unos 30 años que es gerente y unos 40 que es parte” de la Sociedad de Acopiadores de la provincia de Córdoba. En diálogo con Semana Rural contextualizó el escenario en que se dio la reunión con los trabajadores del acopio, representados por la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (Uatre) y los productores, representados por Cartez: “Viene la cosecha gruesa, y desde marzo-abril, y hasta agosto la provincia va a estar levantando, procesando cereal y comercializando. Allí, tanto las casas acopiadoras como las cooperativas son parte de la cadena industrial. Tenemos la Ley 22248 que regula la presencia del personal no permanente, pero hay gente que hace muchos años que trabaja en eso. Los tiempos actuales son diferentes: hay una presencia importante de impuestos distorsivos, operaciones no formales, operaciones directas, entre otras cosas. Hay una disputa entre molinos-fábrica y exportadores, y la puja es quién puede

tratar más cereal. Aparece aquí una asimetría y una competencia desleal entre quienes procesan y quienes exportan. Ellos simplifican y bajan costos al productor, mientras que nosotros debemos honrar diferentes convenios, entre los que se encuentra comercio, camioneros y trabajadores rurales. Respecto a los valores que perciben los trabajadores, el movimiento tarifario se hace anual, y la gente del gremio ha venido con la expectativa de consensuar un aumento”.

Allí apareció el primer foco de conflicto ya que surgió una diferencia importante entre lo establecido “y lo que terminó siendo publicado oficialmente”, dijo Giraudo. Agregó que “nosotros buscamos aclararlo porque lo asignábamos a un problema de impresión, pero nos encontramos con una pretensión desmedida por parte de Uatre”.

Años atrás las relaciones acopio-trabajadores era reglada por la provincia, que se manejaba con convenios zonales. Posteriormente el Estado nacional decidió hacer una tarifa para todo el país, y quedaron algunos acopios que pagaban por encima de esos valores normados en la resolución 37, que fue producto del trabajo en la Comisión Nacional de Trabajo Agrario. “Vinimos a decir que a aquellos trabajadores que están cobrando por encima de eso, no se le va a sacar nada, pero lo consideraremos a cuenta de futuros aumentos. Así, en el futuro, todos podremos tener una sola tarifa y se evitará la competencia desleal”.

El otro tema es que dentro de la tarifa hay varios movimientos que “habíamos consensuado, a través de lo que llamamos el 10 más el 10 por ciento en dos años”, expresó Giraudo. Pero hubo ítems que a juicio de los acopiadores “se han colocado en valores que no se pueden sostener, porque no hay quien pague por ello. Le dijimos que no podemos cumplirlo y por ello se enojaron”, aseveró.

--¿Estaban incluidas en la Resolución 37?

--Sí, pero estaban mal incluidas. Básicamente porque no se condice con la realidad.

--¿Esto está preanunciando algún tipo de conflicto?

--Seguro, seguro. Ahora ingresamos en una etapa de conflicto. Y la tercera cuestión es que el acopio de granos, para competir adecuadamente en agilidad, en el incremento de la cosecha y en los volúmenes, se ha comprometido a incorporar tecnología. Esto ha restado trabajo al personal. En las resoluciones hay obligatoriedades absurdas, como lo es pagar por trabajos que no se hacen. En definitiva, se ha puesto una tarifa muy alta y nosotros no las aceptamos, pero ellos tienen representación nacional en la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, y junto al Gobierno imponen su mayoría. Se observa en las resoluciones la oposición de todas las organizaciones del campo, que son las que nos representan por allí, porque nosotros no tenemos participación.

Nosotros queremos y protegemos a nuestros empleados pero con la nueva Ley de ART nueva, exigencias de la AFIP y las tarifas irracionales del gremio, no se puede seguir.

Dice Cartez: “No hay que abusar del bolsillo del productor”

Ricardo Osella, presidente de Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez) estuvo presente en la reunión de Villa María e intentó construir una mirada componedora: “Nosotros, como representantes de los productores creemos que no debe haber una retribución ilógica. Creemos que el trabajador debe ganar bien y estar registrado, pero la desmesura puede conducir al reemplazo por máquinas y con ello la pérdida de puestos de trabajo. Siempre cuando se da una relación ilógica termina perdiendo el trabajador”.

El dirigente rural explicó: “Para nosotros no es justo pagar por la tarea de ver caer los granos, esto es, verificar el cumplimiento de la Ley de Gravedad, aunque sea poco”.

Osella dice que la Resolución 37 contiene puntos de mayor sensibilidad, y pone como ejemplo que la descarga de un camión vale unos 38 centavos por quintal, y esto es unos 115 pesos por camión. “Allí hay una disidencia”, apunta Osella, y justifica: “La discusión es saber si son celdas abiertas o celdas cerradas, o cómo se juzga la colocación de un chimango, y todas estas tareas tiene acreditación diferente”.

--Y ustedes, ¿cómo lo interpretan?

--Nosotros estamos seguros de una cosa: todo sale de un mismo lugar, que es el bolsillo y el esfuerzo del productor. Y eso llega un momento que se acaba.

La Uatre enojada: “Giraudo es el responsable de que no haya avances”

“Esta fue una convocatoria de la Sociedad de Acopiadores de Cereales y el foco está puesto en la relación que tienen los empresarios con nuestros representados. La idea es encuadrar a los trabajadores en la resolución 37 de la Comisión nacional de Trabajo Agrario, y acordar un ajuste de salarios, visto que la inflación ha producido un deterioro, reconocido por los propios empresarios”, relata Juan Carlos Castro,

prosecretario de Finanzas de UATRE, a cargo de la secretaría gremial de la organización.

--¿Llegaron a algún acuerdo?

--No, lamentablemente. La intervención del señor (Juan Carlos) Giraudo, un asesor de la Sociedad de Acopiadores, distorsionó lo que se había conversado, planteando un encuadre en la resolución 37, sin ningún aumento de salario.

--Lo establecido en la resolución es un piso para ustedes...

--Exacto, después cada una de nuestras seccionales acuerda las mejoras salariales.

--¿Cuáles son las tareas puntuales que están incluidas allí?

--Las tareas puntuales son Paleo de silo con aireación, Silo de emergencia, Silo celda y celdas australianas. Allí es donde el Sr. Giraudo quiere reducir salarios.

--¿Hay empresarios del acopio que han acordado con sus trabajadores?

--Han acordado la resolución y están pagando por encima de lo establecido. A la falta de avance sobre esto lo hacemos responsable únicamente a Giraudo, gerente de los acopiadores. La relación con los empresarios, en cada uno de los pueblos, es muy buena. El problema está aquí...

El representante de los trabajadores rurales afirmó que esta fue una oportunidad perdida y aseguró que los dos sectores, Acopiadores y Sindicato, estaban de acuerdo en aprobar la resolución y evaluar mejoras en algunas tareas. Y adjudican al gerente Giraudo que el encuentro no haya llegado a buen puerto". Y muy enfático, el dirigente sindical lo responsabilizó de cualquier conflicto que pueda darse en la provincia de Córdoba.

--De no cumplirse lo que establece la resolución. ¿estamos en puertas de un conflicto?

--No. El acuerdo se está cumpliendo. Lo que pretende el Sr. Giraudo es que la Comisión de Asesoramiento eleve un pedido a la Comisión Nacional de Trabajo Agrario para que emita una nueva resolución bajando los montos establecidos en la escala.

--¿Cuánto considera Usted que es el desfase entre lo establecido y la pérdida por inflación?

--Alrededor de un 50%

EL DIARIO DE VILLA MARIA

UATRE - Altercado en medio de la negociación salarial

Trabajadores rurales molestos con asesor de los acopiadores
Dirigentes de UATRE se retiraron de una reunión con acopiadores que se realizó ayer en un hotel de Villa María, porque tomaron como "una burla" la propuesta del asesor que los citó para consensuar una suba salarial y luego les propuso rebajarlos



Juan Carlos Castro, del secretariado nacional UATRE con el delegado regional Clemente Iriarte

Esperanzados, los directivos de UATRE (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores) a nivel nacional vinieron a Villa María a reunirse con acopiadores. Habían sido convocados por el asesor, Juan Carlos Giraudo, para tratar de consensuar un aumento para trabajadores rurales.

"No se imagina la sorpresa que tuvimos cuando en realidad, salió pidiéndonos que aprobemos una baja en los magros haberes de nuestros compañeros", dijo Juan Carlos Castro, prosecretario de Finanzas a cargo de la Secretaría Gremial, de UATRE a nivel nacional.

"Nosotros estamos manteniendo reuniones formales en la sede provincial del Ministerio

de Trabajo de la Nación con la comisión Asesora Regional de trabajo agrario, donde los mismos acopiadores coincidieron en que hay que aumentar", dijo Castro. "En función de eso, nosotros responsabilizamos al asesor de la Asociación de Acopiadores, Juan Carlos Giraudo, de los conflictos que pudiera haber por esta actitud que raya en la falta de respeto con los trabajadores", agregó.

La reunión comenzó cordial y hablaron del aumento de algunas categorías. Estaban presentes además de los dirigentes sindicales, los acopiadores de la región y el asesor.

"Luego, cuando comenzamos a hablar de la categoría principal, que es la que define el salario de los que palean el cereal, allí Giraudo habló de reducir los montos", informó Castro.

"Nosotros no vamos a aceptar burlas de esa naturaleza. No sé si nos quiso engañar. Lo cierto es que no respetó ni lo que piensan los mismos acopiadores y enrareció las conversaciones formales que estábamos llevando", concluyó.

Los trabajadores más humildes

La incidencia del monto establecido para el "paleo" no es menor si se tiene en cuenta que la mayoría de los trabajadores rurales no estables hacen esa tarea. Dieron como ejemplo que según lo establecido actualmente, cargar un camión con 30 mil kilos de cereal tiene un costo de 115 pesos, lo que se divide habitualmente entre tres o cuatro trabajadores.

En la provincia de Córdoba, sumando los estables y los de la bolsa de trabajo, hay 15 obreros rurales inscriptos.

"Sabemos que son muchos más, porque hay un porcentaje importante que no están blanqueado", dijo Clemente Iriarte, delegado de UATRE en esta región.

"Por esa razón, las decisiones que tomemos son significativas para el bolsillo de muchos cordobeses, que son los más humildes", apuntó.